

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

[Handwritten signature]

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Magistrado Ponente

AP5922-2017

Radicación 51035

Acta 297

Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

ASUNTO

La Corte resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Delegado de la Fiscalía, el Representante del Ministerio Público y el de las víctimas, contra el auto del 14 de agosto de 2017 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

ANTECEDENTES

1. DARÍO GARCÍA MUÑOZ, postulado a los beneficios de Justicia y Paz, como ex integrante del Frente 47 del Bloque José María Córdoba de las FARC-EP, solicitó su



51035
Darío García Muñoz

4

libertad condicionada a la Fiscalía 17 Delegada ante el Tribunal de la Dirección de Análisis y Contexto, autoridad que una vez verificó su procedencia radicó petición con tal propósito en la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el 3 de agosto del año en curso.

2. En audiencia del 10 de agosto de 2017, la Sala cognoscente escuchó las intervenciones de los sujetos procesales y en providencia del 14 siguiente, resolvió: (i) decretar la conexidad de los procesos de radicado 170011310700120040004300, 200400861-00, 2004-00073 (SIJUF Fiscalía 0866), 2006-00058-00 (SIJUF Fiscalía 73406-503), 170013107001201300030 (Rad. Fiscalía 137.261), con los hechos del proceso de justicia y paz cuya causa fue acumulada a aquella con criterios de priorización Rad. 11.001.60.00253.2008.83435, (ii) conceder la libertad condicionada prevista en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y (iii) *“suspender el presente proceso de Justicia y Paz seguido en contra del postulado DARÍO GARCÍA MUÑOZ, ALIAS ‘PIPA’ y las causas donde se condenaros los hechos conexados en este proveído, hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, quien será la que defina si el mencionado queda a su disposición, y si se mantiene el beneficio que acá se otorga”*¹, conforme con lo dispuesto en el artículo 22 de la Decreto 277 de 2017.

3. La Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de las víctimas, inconformes exclusivamente con la determinación de suspensión del proceso, apelaron la decisión con fundamento en los siguientes argumentos:

¹ Numeral 7 de la parte resolutive de la decisión.



51035
Darío García Muñoz



3.1. La Fiscalía:

(i) Toda vez que el Decreto 277 de 2017, fue expedido por el Presidente de la República en uso de facultades excepcionales para implementar la Jurisdicción Para la Paz, éste no cobija a quienes se desmovilizaron de acuerdo con el régimen transicional de la Ley 975 de 2005, razón por la cual no se puede suspender este proceso.

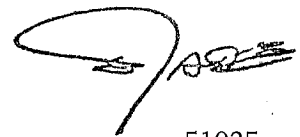
Además, cuando con ello se vería truncado, así sea de forma transitoria, el derecho de las víctimas a conocer la verdad y, se le aparta al postulado de la jurisdicción especial sin que medie decisión judicial que decida acerca de renuncia o exclusión.

3.2. La Procuraduría:

No comparte la aplicación del artículo 22 del Decreto 277 de 2017, ya que su interpretación está sujeta a las pautas del Acuerdo Final para la Paz, que en lo particular no suspende los procesos de Justicia y Paz, menos cuando por su naturaleza especial guarda similitud en cuanto a sus finalidades, esto es la obtención de una paz duradera y estable y la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas.

3.3. El representante de las víctimas:

Compartió los argumentos de la Fiscalía y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los efectos nocivos de la medida



51035
Darío García Muñoz

6

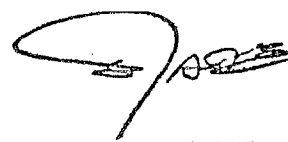
de suspensión pues con ella se impedía la continuación de las versiones libres e incluso, de legalización de los cargos ya aceptados, en contravía del derecho a la justicia del cual son titulares.

4. Por su parte, el defensor del postulado, como no recurrente, coadyuvó la petición de los recurrentes al considerar que dicha reglamentación cobija a las personas que se desmovilizaron con ocasión del proceso de Paz adelantado con el Gobierno y no a su prohijado, quien no ha renunciado al proceso de justicia transicional.

CONSIDERACIONES

1. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 27 de la Ley 1592 de 2012, en concordancia con el artículo 68 *ibidem* y el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

2. Ahora, toda vez que el único motivo de disenso radica en la suspensión del proceso adelantado en justicia y paz a Darío García Muñoz (al cual se decretó la conexidad de otras actuaciones) con ocasión de la concesión de la libertad condicionada, la Sala en atención al principio de limitación, dilucida los efectos del artículo 22 del Decreto 277 de 2017, que regula el asunto.



51035
Darío García Muñoz

X

2.1. Para ello, basta reiterar la posición de la Sala explicada en providencia AP5069-2017, radicado 50655, frente a un asunto de idéntica naturaleza:

“En efecto, para comenzar debe resaltarse que en el mismo Acuerdo Final para la Paz se declara que sus contenidos “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo” de lo acordado y que por ello, “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Con base en lo dispuesto en el artículo 2 del Acto legislativo 01 de 2016, el Presidente de la República expidió el Decreto 277 de 2017 con el propósito de regular el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016 que, a su vez, estableció la amnistía e indulto por delitos políticos y conexos, los tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y el régimen de libertades aplicable a los destinatarios de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El artículo 22 del referido decreto establece:

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las ZVTN, de que trata la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación de este Decreto quedarán a disposición de dicha Jurisdicción”.

Entonces, dicha norma debe ser interpretada conforme a lo establecido en el Acuerdo Final para la Paz, el cual establece en el literal j del numeral 48 del punto 5 lo siguiente:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuará adelantando la investigación hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas (...), anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para seguir investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Considera la Sala que la mencionada suspensión de los procesos debe ser interpretada de la siguiente manera: Dado el imperativo de conocer la verdad, no podrá suspenderse el curso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pero para tal efecto debe entenderse el ámbito de su investigación en los términos definidos en la Ley 906 de 2004, es decir, como la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación (numeral 3 del artículo 250 de la Constitución), de manera que se excluyen actividades tales como las órdenes de captura, los interrogatorios, la formulación de imputación, la imposición de medidas de aseguramiento, la acusación, etc. Y, desde luego, ello conlleva, con mayor razón, la suspensión de los juicios en trámite.

En los procesos gobernados por la Ley 600 de 2000, únicamente y por los mismos argumentos, una vez dispuesta la suspensión, la Fiscalía sólo podrá adelantar labores de aseguramiento de las

pruebas, sin que haya lugar a órdenes de captura, indagatorias, resoluciones de medidas de aseguramiento o acusación y tanto menos tramitar juicios o proferir sentencias.

Ahora, dada la especial naturaleza de la Ley 975 de 2005, en cuanto las versiones de los postulados son el principal insumo para arribar a la verdad, nada obsta para que sigan siendo escuchados.

Resta señalar, que será ante la Jurisdicción Especial de Paz donde concurrirán los miembros de las FARC-EP que se comprometieron a decir la verdad sobre los delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado.

Así las cosas, resulta improcedente la petición de los recurrentes orientada a que no se aplique el citado precepto, pues si de conformidad con el artículo 230 de la Constitución, los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, no se aviene con tal imperativo eludir el cumplimiento del claro y contundente mandato legal con fuerza de ley, no incompatible con el orden constitucional, más aún si tanto el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, como la Jurisdicción Especial para la Paz creados mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, al igual que Ley 975 de 2005, tienen como eje central la reivindicación de las víctimas y, por tanto, sus derechos no se verán menguados con el traslado del proceso a la nueva jurisdicción transicional, donde deberán ser reconocidos en forma definitiva y asegurada su indemnización en los términos previstos en la ley.

3. Por demás, no es cierto, como aduce la Fiscalía, que la suspensión de procesos esté consagrada exclusivamente para quienes se desmovilizaron en forma colectiva, pues la norma contiene un mandato general que no discrimina la forma en que el

beneficiario de la libertad condicionada hizo dejación de las armas. Donde la ley no distingue, no le corresponde hacerlo al intérprete, según lo prevé el principio general de interpretación de la ley reconocido por la jurisprudencia nacional (C-054-2016, C-317-2012, C-975-2002, entre otras).

Tampoco es acertado afirmar, como lo hace la fiscal recurrente, que la suspensión del proceso seguido contra GARCÍA GARCÍA implica “derogar” la Ley 975 de 2005 porque dicho estatuto sigue vigente y produciendo efectos respecto de los postulados que no son destinatarios de la Justicia Especial para la Paz e, incluso, para aquéllos que siéndolo, optan por permanecer en el proceso de Justicia y Paz.

4. La incertidumbre acerca de la fecha en la cual comenzará sus labores la recién creada Jurisdicción Especial de Paz no faculta desconocer una norma legalmente incorporada al sistema jurídico nacional que pretende agrupar los procesos adelantados contra los integrantes de las FARC-EP para que sus militantes sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, según se pactó en el Acuerdo Final. Téngase en cuenta que cuando el pasado 18 de febrero se expidió el Decreto 277 de 2017 ya se sabía que su implementación no sería inmediata, sin embargo, no se dispuso incluir condicionamientos sobre su aplicación en el tiempo.

5. La suspensión de procesos en curso, en criterio de la Corte, obliga a las autoridades del orden ejecutivo y legislativo encargadas de la implementación y puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, a proceder sin dilaciones en procura de su pronta puesta en marcha.”

2.2. Además, lo anterior no significa que la situación del postulado quedó definida y por ello, según se reclama

debe exigirse su renuncia a la actuación adelantada en justicia y paz. Lo que ordena la norma es una *pausa* del diligenciamiento acorde con las precisiones previamente referidas hasta cuando la Jurisdicción Especial para la Paz establezca si lo acoge o no, caso positivo en el cual sí se tendrá que dar por terminado el proceso de justicia transicional o, en el evento contrario, restablecer a fin de se culmine.

3. Lo expuesto en precedencia permite desestimar las apelaciones impetradas y en consecuencia, se confirmará la decisión censurada con las precisiones anotadas. .

* * * * *

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión del 14 de agosto de 2017 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín con las salvedades expuestas en la parte considerativa de este proveído, relativas al deber de continuar con las versiones de los postulados y con las actividades investigativas aquí relacionadas.

[Handwritten signature]

12

2. Contra esta providencia no procede ningún recurso.
Devuélvase la actuación al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[Handwritten signature]
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

[Handwritten signature]
JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

[Handwritten signature]

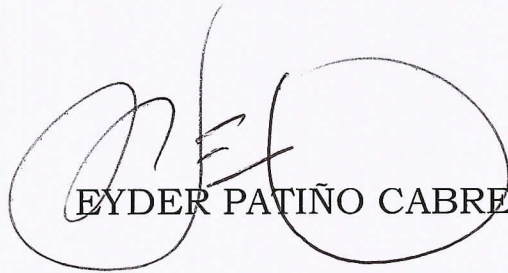
JOSE LUIS BARCELÓ CAMACHO

[Handwritten signature]
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

~~LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA~~

[Handwritten signature]
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

13



EYDER PATIÑO CABRERA



PATRICIA SALAZAR CUELLAR



LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO



Nubia Yolanda Nova García

Secretaria